

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°228

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral promovido por los señores **CARMELINA BOTERO DE BEDOYA** y **ÁNGEL NABOR BEDOYA VILLEGAS** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Los demandantes solicitan que se reconozca y pague la pensión de sobrevivientes generada con ocasión del fallecimiento de su hijo, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y en subsidio, la indexación.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indicaron que su hijo **Carlos Arturo Bedoya Botero** falleció el **5 de octubre de 2018**.

Su hijo no conformó grupo familiar o tuvo hijos conviviendo con ello durante toda su vida y soportando económicamente su hogar.

Por esta razón, el día **7 de junio de 2019** presentaron solicitud pensional, la cual les fue negada mediante la **Resolución SU 218884 del 15 de agosto de 2019**.

Contestación Colpensiones

La AFP demandada a través de apoderado indicó que es cierto lo referente al fallecimiento de su afiliado y a la reclamación de la pensión de sobrevivientes realizado por sus padres, manifestando en lo referente a las condiciones de vida de esté que no le constan y en lo que toca con la dependencia económica explicó que mediante investigación administrativa se pudo corroborar que la misma no existió ya que el causante no tenía un trabajo estable que le permitiera el sostenimiento económico de sus padres.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de los intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

Sentencia de primera instancia

La Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **16 de mayo de 2022**, condenó a **Colpensiones** a reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de los señores **Carmelina Botero de Bedoya y Ángel Nabor Bedoya Villegas** desde el 6 de octubre de 2018, en un 50% del salario mínimo legal mensual vigente a cada uno de ellos, con su mesada adicional cada año y previo descuento del aporte de ley con destino al Sistema de Salud.

De otro lado, absolvió el pago de intereses moratorios y en su lugar condenó a **Colpensiones** a realizar el pago indexado de las obligaciones a su cargo.

Como fundamento de su decisión indicó que si bien fue admitido por los padres del causante al momento de presentar la reclamación administrativa que no existía un aporte monetario del hijo fallecido, en el caso particular se presentan circunstancias que merecen un especial estudio y es que si bien no existe la evidencia de un aporte monetario del causante, es claro que con su trabajo en el campo aportaba alimentación y mejores condiciones materiales de

vida al hogar que conformaba con su padres, las cuales se vieron afectadas luego de su muerte.

Esta decisión fue apelada por los apoderados de las partes, quienes sustentaron su inconformidad en los siguientes términos:

Recurso de apelación parte demandante

El recurrente solicita que se **revoque parcialmente** la decisión de primera instancia y se proceda a imponer el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por cuanto se presenta en este caso retardo en el pago de mesadas pensionales , sin que exista una razón objetiva para abstenerse del pago, toda vez que desde la investigación administrativa **Colpensiones** contaba con elementos claros para determinar la existencia de la dependencia económico, los cuales al hacer una análisis parcial de la información recolectada simplemente desconoció.

Recurso de apelación Colpensiones

La impugnante solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, y en su lugar se absuelva a esa entidad de todas las pretensiones presentadas en su contra, puesto que, no demostraron los padres del causante la existencia de dependencia económica, esto con base en las conclusiones extraídas de la investigación administrativa en la que se informó que el afiliado para la fecha de su muerte no tenía un empleo estable que le permitiera asumir el sustento económico de sus padres.

Conforme con lo que se pudo establecer en la investigación administrativa es claro que los padres tenían unos ingresos producto de un arrendamiento y de un subsidio recibido del Estado, siendo el hijo quien administraba estos dineros, lo que implica que los padres eran autosuficientes incluso ayudaban en el sostenimiento de su hijo fallecido.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Colpensiones** solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia, toda vez que, en la investigación administrativa realizada por esa entidad se pudo establecer que no existía dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, puesto que *“...el causante no tenía un empleo estable con el cual pudiera colaborar en su hogar de manera constante, información que fue corroborada por los mismo*

solicitantes, quien aluden que su hijo colaboraba mucho con los quehaceres de la finca, pero que monetariamente no les daba ninguna clase de ayuda, información que fue confirmada en audiencia de primera instancia en el interrogatorio a los testigos y demandante.”

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Determinar si el señor **Carlos Arturo Bedoya Botero** dejó causados los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, (ii) Establecer si los señores **Carmelina Botero de Bedoya** y **Ángel Nabor Bedoya Villegas** probaron la dependencia económica respecto su hijo fallecido para acceder a la pensión de sobrevivientes y (iii) Determinar si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su lugar se debe condenar a la indexación de la condenas.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El señor **Carlos Arturo Bedoya Botero** fue hijo de los señores **Carmelina Botero de Bedoya** y **Ángel Nabor Bedoya Villegas** (01/pág.15).
2. El señor **Carlos Arturo Bedoya Botero** falleció el día **5 de octubre de 2018** (01/pág.13).
3. El causante cotizó a **Colpensiones** un total de 620,57 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 50,86 fueron aportadas en los 3 años anteriores a la fecha de su muerte (01/pags.23-25).
4. El día **7 de enero de 2019**, los padres del causante solicitaron ante **Colpensiones** el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes (01/pág.32-33).

5. **Colpensiones** a través de la **Resolución SUB 218884 del 15 de agosto de 2019** negó la condición de beneficiarios de los padres por no acreditarse el requisito de dependencia económica.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

Del cumplimiento del requisito para dejar causada la pensión de sobrevivientes

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, establece como requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes por parte de los afiliados, haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Para establecer el cumplimiento de este requisito debe tenerse en cuenta que el señor **Carlos Arturo Bedoya Botero** falleció **5 de octubre de 2018** (01/pág.13), luego debe determinarse si en los tres años inmediatamente anteriores a esta fecha, esto es, hasta el **5 de octubre de 2015** cuenta con un número mínimo de 50 semanas cotizadas, advirtiéndose una vez revisada su historia laboral visible en el archivo 1, pags.23-25, que esta condición se cumple habida cuenta que en ese periodo de tiempo, el causante aportó un total de 50,86 semanas.

En ese orden, al estar cumplido este requisito procederá la Sala a verificar si los padres del causante cumplen con la dependencia económica del hijo fallecido para acceder a la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de éste.

De la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.

De la lectura de este artículo resulta claro que los padres cuando pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, deben

demostrar la dependencia económica del causante para el momento del fallecimiento, aspecto para cuya determinación la Corte Suprema de Justicia ha definido unos criterios, en la sentencia SL-5605-2019, a saber:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta:

«Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

Regular y periódica

De manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.

Además de estas exigencias, el Alto Tribunal siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia C-111 de 2006, ha indicado en sentencias como la reciente SL-3573 de 2021, que, la existencia de un ingreso propio del padre o el apoyo de otro miembro de la familia no son elementos concluyentes que desvirtúen el criterio de necesidad del aporte. De forma literal dijo la Corte:

En este contexto, la jurisprudencia de esta Sala tiene por sentado que el ingreso adicional que tenga un miembro del grupo familiar del causante no logra desvirtuar la dependencia económica, como aquí lo asegura la censura al enrostrar la pensión de salario mínimo que recibe la madre del causante, pues el grado de dependencia económica no depende del ingreso adicional que pueda tener algún miembro del grupo familiar, sino del estado de necesidad que en ellos se crea al faltar el aporte, ayuda o contribución que, de manera subordinada, significativa y

constante, recibían del afiliado fallecido, como lo dio por establecido el Tribunal en este caso.

Una vez conocidos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y los parámetros fijados por la jurisprudencia para efectos de establecer la dependencia económica, se debe determinar si la misma fue demostrada en el caso sometido a estudio.

De la prueba de la dependencia económica

Se indica por parte de la apoderada de **Colpensiones** que no se valoró en debida forma el contenido de la investigación administradora, toda vez, que las versiones recolectadas en la misma dan cuenta de que el señor **Carlos Arturo Bedoya Botero** no contaba con la capacidad económica para que sus padres dependieran de él en este aspecto, antes, por el contrario, la conclusión que se puede obtener una vez estudiada esta prueba es que el hijo dependía de sus padres.

Para realizar el estudio de este caso, es fundamental partir de lo confesado por los padres del causante, en particular de la madre, la señora **Carmelina Botero de Bedoya** quien indicó que en vida de su hijo nunca recibió dinero por parte de este, lo que se corresponde con la versión contenida en la investigación administrativa realizada por **Cosinte-RM** (10Exp.Admitivo/GEN-REQ-IN), cuya investigadora consignó:

Manifestó que siempre vivió con su hijo el causante del cual no dependía económicamente de él, ya que el señor Carlos Arturo Bedoya Botero no trabajaba de manera permanente, manifestó que él les colaboraba mucho con los quehaceres de la finca, pero que monetariamente no les daba ninguna clase de ayuda.

Este relato es corroborado por las testigos **Gladys Elena Villegas y Natalia Ramírez Villegas**, quienes en un relato claro, detallado y veraz informan conocer el grupo familiar integrado por el causante y sus padres, por ser familiares de estos e informan que los padres del causante son propietarios de un inmueble en el Municipio del Retiro por el que reciben una renta mensual de **\$200.000** y la entrega de un subsidio por parte del Gobierno que para la fecha de la muerte del señor **Bedoya Botero** ascendía a **\$60.000** por cada uno.

Informan en lo referente al causante que desconocían a cuanto ascendían los ingresos de este, pero que laboraba en el cuidado de animales en fincas vecinas

por lo que recibía una remuneración precaria, además cultivaba la finca de sus padres y vendía el producto de sus cosechas con lo que compraba el mercado para el hogar común, además de que era el encargado del cuidado de sus padres quienes tienen una avanzada edad.

Una lectura superficial de estas pruebas puede llevar a la conclusión de que no existía una ayuda económica del causante, puesto que no se presenta la entrega de un aporte monetizado, sobre todo cuando se relata que los ingresos del afiliado eran precarios, sin embargo, el análisis en este caso debe ser más pormenorizado y atender a los criterios de certeza, periodicidad y ser significativos.

Para ese fin debe tenerse en cuenta las particularidades de este caso y para ello se debe partir de la edad que tenían los padres del causante para la fecha del deceso del causante, que, en el caso de la madre **Carmelina Botero de Bedoya** era de 78 años de edad¹ y la de su padre **Ángel Nabor Bedoya Villegas** era de 90 años de edad² lo que los sitúa en una condición de personas de especial protección constitucional que sobrevivían con precarios ingresos, puesto que, como se acredita con los testimonios sus ingresos mensuales provenían del arrendamiento de un inmueble **\$200.000** y del sistema de protección social que mensualmente les entregaba un subsidio de **\$60.000**.

En ese entorno económico, su hijo **Carlos Arturo Bedoya Botero** de quien las testigos informan prestaba sus servicios en el cuidado de animales de fincas vecinas, labor que le era remunerada (desconocen el valor) y obtenía otros ingresos producto de la venta de cultivos que realizaba en la finca de los padres, aportaba esas sumas para la manutención del hogar común, puntualmente en rubros como la alimentación, reservando una parte de este para la contribución en su pensión.

Lo anterior deja ver que si bien el causante no tenía un empleo u ocupación que le garantizara unos ingresos “estables” -como lo sostiene **Colpensiones** en el acto administrativo que negó el derecho-, es evidente que los mismos existieron y fueron compartidos con sus padres de manera regular y periódica, siendo estos significativos para el grupo familiar pues con el aporte de los mismos se suplían mínimos de dignidad, que desaparecieron con la muerte del causante, pues como lo afirman las testigos **Gladys Elena Villegas** y **Natalia Ramírez Villegas** luego del fallecimiento de este, sus condiciones de vida son más precarias.

¹Nació el 21 de julio de 1940 (01/pág.18).

² Nació el 2 de enero de 1928 (01/pág.17).

Sobre este aspecto es relevante hacer mención de lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-5681-2021, en la que al pronunciarse frente al argumento sostenido por un recurrente en el sentido de que la existencia de pocos ingresos en el causante permite establecer la ausencia de dependencia económica, expresó:

Considera la Sala que el poco tiempo, o la poca densidad de cotizaciones no permite concluir que Jhon Clemente no pudiera contribuir al sostenimiento de su hogar, los pocos ingresos o el no probarse una reiterada vinculación laboral no puede llevar a la conclusión de que no existe una real contribución al sostenimiento de sus padres, pues se encuentra acreditado que quien se encargaba de los pagos como el arriendo, alimentación, y servicios así como la asistencia de sus padres era el causante, así concluyó el juez de segunda instancia después de analizar los testimonios y documentales allegadas al proceso.

A juicio de la Corte, la dependencia no debe ser total y absoluta, está claro que existía una falta de autosuficiencia económica, pues se demuestra que ante la enfermedad y muerte del demandante sus beneficiarios no podían cumplir con la manutención del hogar, de tal manera que se encuentra probado que existe una relación de subordinación económica de parte de la persona fallecida.

Así las cosas, encuentra la Sala que fue acertada la decisión de primera instancia, motivo por cual se **confirmará**.

De la procedencia de la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Se solicita por parte del apoderado de la parte demandante que se imponga a **Colpensiones** el pago de los intereses moratorios de la Ley 100 de 1993, toda vez que, existe un retardo en el pago de mesadas pensionales, sin que existiera una razón objetiva para su negativa, pues desde la investigación administrativa existía certeza de la dependencia económica de los padres respecto del causante.

En lo referente a esta manifestación debe recordar la Sala que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen como propósito resarcir al pensionado por el retardo en el pago de la prestación y en tal sentido

tiene carácter objetivo pues se debe tener en cuenta para su imposición el retardo en que incurrió la administradora de pensiones.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha explicado que existen circunstancias particulares en las cuales no proceden los intereses, a saber: i) cuando existe disputa entre los beneficiarios, ii) la negativa es producto de la interpretación objetiva de la ley vigente y iii) la pensión es reconocida producto de un cambio jurisprudencial.

Una vez revisado el caso sometido a estudio no se advierte que la administradora se encuentre dentro de alguno de los supuestos enlistados, por el contrario, su negativa se sustenta en que a partir de la conclusión obtenida en su investigación administrativa determinó que no existía dependencia económica, tesis que fue desvirtuada en desarrollo del presente proceso.

En este punto se debe señalar que la negativa de la prestación fundada en el no cumplimiento de requisito de dependencia no es un elemento por el cual se pueda generar una exoneración del pago de intereses, debiendo en este sentido recordar lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-843-2021, en la que al respecto indicó:

Lo adocinado en las providencias que sirven de sustento argumentativo al recurrente, contrario a lo manifestado por éste, nos enseñan, que la buena o mala fe o las circunstancias particulares que condujeron a la discusión del derecho pensional, no pueden ser consideradas para establecer la procedencia de los intereses moratorios de que trata el precepto bajo análisis, tal como se indicó en sentencias como la CSJ, SL 23 sep. 2002, rad. 18512, SL 29 may. 2003, rad. 18789, SL 13 jun. 2012, rad. 42783, entre otras; pues no se concibe como un acto liberatorio de tales réditos, la negativa de la prestación pensional por el simple hecho de existir un motivo de duda sobre el surgimiento del derecho por parte de la administradora pensional, menos aún, fincada en la acreditación fáctica de la dependencia económica, como se esgrime y lo sustenta en el cargo la entidad demandada, o por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales previamente desarrollados por los jueces competentes frente a la materia en discusión, como se verificó en el presente caso.

De manera que en ningún desafuero incurrió el sentenciador, cuando en aplicación del artículo 141 de la Ley de Seguridad Social, y ante la

tardanza en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la condenó por dicho concepto.

Así las cosas, encuentra la Sala que le asiste razón al apoderado recurrente al solicitar la imposición de los intereses moratorios, los cuales deberán ser reconocidos por **Colpensiones** luego de transcurridos dos meses de la reclamación pensional conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 717 de 2001, y como quiera que los padres presentaron la solicitud del derecho pensional el **7 de enero de 2019** (01/pág.32-33), la fecha desde la cual se causan será el **8 de marzo de 2019**.

En orden a lo anterior, se **revocará** la condena al pago de la indexación de las condenas, como quiera que la misma resulta incompatible con el reconocimiento de intereses, puesto que estos tienen incluido un contenido devaluatorio (Sentencias SL1016-2022, SL1015-2022 y SL-9316-2016) y en su lugar se **condenará** al pago de los intereses moratorios que deberán ser liquidados sobre cada una de las mesadas adeudadas atendiendo a la fecha de su exigibilidad teniendo como fecha inicial el día **8 de marzo de 2019** y como fecha final aquella en la que se efectuó el pago de las sumas adeudadas.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Colpensiones** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia a cargo de la entidad demandada y en favor de los demandantes se fijan en la suma de **\$1'000.000**.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, el día **16 de mayo de 2022**, en el proceso ordinario adelantado los señores **CARMELINA BOTERO DE BEDOYA** y **ÁNGEL NABOR BEDOYA VILLEGAS** contra **COLPENSIONES**, **REVOCÁNDOLA** en su numeral tercero, para en su lugar **CONDENAR** a

Radicado: 05001-31-05-006-2020-00164-01

Radicado Interno: P1352222

Asunto: Confirma y revoca Sentencia

COLPENSIONES a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del **8 de marzo de 2019** y hasta el momento en que se efectuó el pago de las mesadas adeudadas, esta operación deberá realizarse con cada una de las mesadas pensionales atendiendo a la fecha de su exigibilidad conforme se anotó en la parte motiva.

Costas en esta instancia a cargo de **COLPENSIONES**. Las agencias a cargo de la entidad demandada y en favor de los demandantes se fijan en la suma de **\$1'000.000**.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado: 05001-31-05-006-2020-00164-01
Radicado Interno: P1352222
Asunto: Confirma y revoca Sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante (s)	Carmelina Botero de Bedoya y Ángel Nabor Bedoya Villegas
Demandado	Colpensiones
Radicado	05001-31-05-006-2020-00164-01
Decisión	Confirma y revoca Sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 18 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 18 de agosto de 2022 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO